



El Gobierno vasco confiará a auditores la mediación en los desahucios



MANU ALVAREZ

✉ malvarez@elcorreo.com

Vivienda ultima los detalles de un plan que incluirá también una oferta de alquileres sociales

BILBAO. El Gobierno vasco ultima un plan de actuación en torno a las ejecuciones hipotecarias de las entidades financieras, con el objetivo de reducir el número de desahucios y facilitar vías alternativas para que las familias afectadas puedan conservar sus pisos o, al menos, encontrar una solución provisional que les garantice un techo. El proyecto, que se desarrolla de forma paralela entre los departamentos de Vivienda y Justicia del Ejecutivo autónomo, contempla la opción de depositar en manos de un auditor los trabajos de mediación entre los afectados y las entidades financieras.

El Gobierno vasco se ha inspirado en el modelo desarrollado en Cataluña desde principios de 2010. La Generalitat puso entonces en marcha Ofideute, una entidad encargada de prestar asesoramiento a las familias que se encuentran al borde del desahucio y también de dirigir las conversaciones con bancos y cajas de ahorros. Según ha podido conocer EL CORREO, el Departamento de Justicia del Gobierno vasco mantiene conversaciones desde hace semanas con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, con el fin de firmar un acuerdo que facilite este trabajo. En síntesis, el



Protesta de la plataforma Stop Desahucios frente a una entidad financiera en Bilbao. :: IGNACIO PÉREZ

Ejecutivo autónomo actuará como valedor del proceso y también financiará los honorarios de los auditores que acepten participar en esta iniciativa. Los profesionales serán los encargados de analizar la situación patrimonial y financiera de los afectados por el impago de sus hipotecas, sus posibilidades de conseguir recursos en el corto o medio plazo, y plantearán, en su nombre, diferentes alternativas a las entidades financieras. Entre ellas estará la posibilidad de renegociar los créditos, aplicar periodos de carencia en el pago de las cuotas e, incluso, la dación en pago en los casos en los que pueda plantearse.

El servicio de mediación no estará abierto a todos los ciudadanos,

ya que el Gobierno quiere establecer limitaciones –tasación de las viviendas, condiciones de las familias afectadas, situación patrimonial, etc.–, que serán dadas a conocer en los próximos días, cuando se firme el acuerdo con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Algunas fuentes cercanas al proyecto señalan que en Cataluña la iniciativa que ha puesto en marcha la Generalitat, así como otras idénticas auspiciadas por ayuntamientos de esta comunidad autónoma, han «conseguido dar una salida satisfactoria al 60% de los casos que se han planteado».

El gabinete que preside el lehendakari Patxi López ha rechazado, sin embargo, la propuesta realiza-

da por el presidente de Kutxabank, Mario Fernández, que supondría utilizar fondos públicos –junto a otros de las obras sociales de las cajas– para ayudar al pago de las cuotas pendientes de los créditos.

Por otra parte, el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, tiene previsto mantener hoy una reunión con varias entidades financieras que operan en el País Vasco con el objetivo de avanzar en los detalles de la 'segunda pata' del plan contra los desahucios. La idea, a falta aún de concretar los detalles y el esquema de financiación, es la de habilitar una opción de alquileres sociales para aquellos ciudadanos afectados por la ejecución de su vivienda que no puedan evitar el desahucio.